

LEY 793 DE 2002

(diciembre 27)

Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002

<Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 170 2014 >

Por la cual se deroga la Ley [333](#) de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 170 de 2014, 'por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio', publicada en el Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014.

- Modificada por la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011 'Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad'.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán a los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014'

- Modificado por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010 'Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial'

- Adicionada por la Ley [1330](#) de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.413 de 17 de julio de 2009 'Por la cual se adiciona la Ley [793](#) de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio de colaboración'

- Modificada por la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.

- Aparte subrayado del epígrafe de la ley declarado EXEQUIBLE por el cargo estudiado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-821-06 de 4 de octubre de 2006, Magistrado Ponente [Humberto Antonio Sierra Porto.

- Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en relación con el cargo formulado por haberse sometido al trámite de Ley estatutaria'.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPITULO I.

DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO.

ARTÍCULO 1o. CONCEPTO. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en relación con los cargos formulados por violación de las garantías del debido proceso consagradas en el artículo [29](#) de la Constitución y el artículo [34](#) de la Carta Política en cuanto se refiere a la naturaleza y autonomía de la acción'.

ARTÍCULO 2o. CAUSALES. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, cuyo nuevo texto es el siguiente:> Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen ilícito del mismo.
2. Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.
3. Cuando los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito.
4. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.
5. Cuando los bienes de que se trate tengan origen lícito, pero hayan sido mezclados, integrados o confundidos con recursos de origen ilícito. Se exceptúan los títulos depositados en los Depósitos Descentralizados de Valores, siempre y cuando los tenedores de esos títulos cumplan satisfactoriamente con las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le sean exigibles.

PARÁGRAFO 1o. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición y el origen lícito de los bienes.

PARÁGRAFO 2o. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:

1. El delito de enriquecimiento ilícito.
2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público y que correspondan a los delitos de peculato, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas; arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, el económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, la seguridad pública, la administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, el secuestro extorsivo, la extorsión, el proxenetismo, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Notas del Editor

- Para la interpretación de este párrafo 2o. debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo [9](#) de Ley 1336 de 2009, 'Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes', publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009, el cual establece:

(Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original que a continuación transcribe:)

'ARTÍCULO [9](#)o. NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. La Ley [793](#) del 27 de diciembre de 2002 por la cual se deroga la Ley [333](#) de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio y las normas que la modifiquen, se aplicará a los hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles y los demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje, cuando tales inmuebles hayan sido utilizados para la comisión de actividades de utilización sexual de niños, niñas y adolescentes.

Los bienes, rendimientos y frutos que generen los inmuebles de que trata esta norma, y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a las leyes, deberán destinarse a la financiación del Fondo contra la Explotación Sexual de Menores. Los recaudos generados en virtud de la destinación provisorio de tales bienes se destinarán en igual forma.'

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda mediante Sentencia C-591-12 de 25 de julio de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio.
- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Del texto original, el inciso 1o. , los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 Inc. 1o., 7 salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, y el párrafo 1o. declarados EXEQUIBLES; y el párrafo 2o. CONDICIONALMENTE exequible 'en el entendido que esta disposición gobierna todas las causas previstas en el artículo 2o. de esta ley'; por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 11 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 2. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriera cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo.
2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.
3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito.
4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.
5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa.
6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de títulos que negocien en centrales de depósito de valores, debidamente acreditadas ante la autoridad competente siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las obligaciones de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos, de conformidad con las normas vigentes.

7. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen **ttc** del bien perseguido en el proceso.

PARÁGRAFO 1o. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de oposición.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:

1. El delito de enriquecimiento ilícito.

2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que correspondan a los delitos peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensas nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y proxenetismo.

ARTÍCULO 3o. DE LOS BIENES. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014 por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a extinción del dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles, inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda recaer derecho de propiedad. Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y rendimientos de los mismos.

<Inciso modificado por el artículo 73 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: > Cuando resultare posible ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales versa la extinción del dominio, porque estos hayan sido enajenados, destruidos, ocultados o permutados, el Fiscal debe identificar bienes lícitos de propiedad del accionado y presentarlos al Juez, para que declare extinguido el dominio, sobre bienes y valores equivalentes. Lo anterior no podrá interpretarse en perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo 73 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales, emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

<INCISO 2> Cuando no resultare posible ubicar, o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales versa la extinción del dominio, al momento de la sentencia, podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre bienes o valores equivalentes del mismo titular. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe exentos de culpa.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

CAPITULO II.

DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

ARTÍCULO 4o. DE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir de 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> La acción de extinción de dominio de trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y proce sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su podi los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cual otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o e que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.

Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causi muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previsto en el artículo [2o](#).

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740- de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 5o. DE LA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 74 c Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: > La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fis General de la Nación o a solicitud de cualquier persona, cuando se considere que existe la probabilidad que concurra alguna de las causales previstas en el artículo [2o](#) de la presente ley. También se inicia acción de extinción de dominio cuando los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados de de un proceso penal, y el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objet investigación o habiéndolo sido no se hubiese tomado sobre ellos, por cualquier causa, una deci definitiva.

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la Direc Nacional de Estupeficientes, cualquier institución pública, o cualquier persona natural o jurídica, de informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la ac de extinción de dominio. El incumplimiento de este deber por parte de un servidor público constituirá disciplinaria. Los organismos internacionales, habilitados para el efecto por un tratado o convenio colaboración recíproca celebrado con el Gobierno de Colombia, podrán dar noticia de ello, para el inicio c acción de extinción de dominio.

PARÁGRAFO 1o. La Dirección Nacional de Estupeficientes desde la fase inicial podrá intervenir como p dentro del proceso de extinción de dominio. Estará facultada para aportar y solicitar la práctica de pru

dirigidas a demostrar la existencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo [2o](#) de la presente ley, la identificación de los bienes o la de bienes equivalentes, solicitar medidas cautelares sobre ellos, impugnar las decisiones, que se profieran en el trámite de extinción de dominio, así como impugnar providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2o. En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente comprobado que no existe estructura alguna de las causales invocadas, o que se incurrió en un error en la descripción del bien, o que la acción no puede iniciarse o proseguirse, el operador judicial que lo advierta, decretará de manera extraordinaria la improcedencia de la acción. Esta decisión deberá ser consultada.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 74 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Incisos 1o., 2o. y párrafo del texto original declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño 'en los términos de la parte motiva de la Sentencia'.

Dispone la Corte en la parte considerativa de la sentencia: ' ... De acuerdo con lo expuesto, si bien el legislador se halla habilitado para reconocerse a la referida entidad administrativa, la facultad de intervenir como parte en el proceso de extinción de dominio, la Corte, para evitar que el ejercicio de esta facultad desborde la índole constitucional de la acción que a través de él se ejerce, declarará exequible el párrafo del artículo 5º en el entendido que la intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes sólo tendrá lugar en los procesos en que demuestre su interés y en relación con el bien cuyo origen se vincule a actividades de narcotráfico y conexos.'

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 5. La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación, cuando concurra alguna de las causales previstas en el artículo [2o.](#) de la presente ley.

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, Dirección Nacional de Estupefacientes, cualquier institución pública, o cualquier persona natural o jurídica, deberán informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de bienes que pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio. Los organismos internacionales, habilitados para efecto por un tratado o convenio de colaboración recíproca celebrado con el Gobierno de Colombia, podrán dar noticia de ello, para el inicio de la acción de extinción de dominio.

PARÁGRAFO. La Dirección Nacional de Estupefacientes, podrá intervenir como parte dentro del proceso de extinción de dominio, que de oficio inicie la Fiscalía General de la Nación, cuando le asista interés jurídico para actuar. Estará facultada para presentar y solicitar la práctica de pruebas dirigidas a demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar medidas cautelares sobre los mismos, impugnar la resolución de improcedencia de la acción, y la providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado, cuando se cumplan los requisitos del artículo [10](#) de la presente ley.

ARTÍCULO 6o. RETRIBUCIÓN. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014 por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 75 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, o que aporte, reciba o aporte una retribución de hasta el 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación y venta de los bienes, o del valor comercial de los mismos cuando el Estado los retuviere para cualquiera de sus dependencias. Esta tasación la hará el juez en la sentencia, de oficio, o a petición del fiscal, teniendo en cuenta la efectividad de tal colaboración.

La denuncia por la cual se pretenda una retribución, se tramitará en cuaderno separado de la actuación principal y estará sometida a reserva. De igual manera será reservado el acto administrativo a través del cual la Dirección Nacional de Estupefacientes pague la retribución ordenada por el juez.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 75 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.107 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán a los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales o emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en los términos de la parte moti de la Sentencia'.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 6. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, recibirá u retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o (valor comercial de los mismos, dependiendo de la colaboración; cuando el Estado los retuviere pa cualquiera de sus órganos o dependencias. Esta tasación la hará el Juez en la sentencia, de oficio, c petición del Fiscal.

ARTÍCULO 7o. NORMAS APLICABLES. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio d 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 76 de la Ley 145 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposici de la presente ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civi su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni exi la acumulación de procesos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 76 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinci de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicará los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con ba en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuacion tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 7. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente ley sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Penal o del Código Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para impedir que profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de procesos. Una vez que el expediente entre al despacho para fallo, tendrá prelación sobre los demás procesos que en el mismo se adelanten, salvo sobre aquellos en los que fuere preciso resolver la situación jurídica de un detenido.

CAPITULO III.

DEL DEBIDO PROCESO Y DE LAS GARANTÍAS.

ARTÍCULO 8o. DEL DEBIDO PROCESO. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso ~~que le es propio~~, permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes, y ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Política consagra

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jair Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 9o. DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los afectados, y en particular los siguientes:

1. Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de bienes cuya titularidad se discute.
2. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción de dominio.
3. Probar que, respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro del proceso de Extinción de Dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1096-03 de 19 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 9-A. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de

julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 77 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.

El fiscal podrá decretar la práctica de otros medios de prueba no contenidos en esta ley, de acuerdo con las disposiciones que lo regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

Se podrán utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana.

Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país podrán trasladarse y serán apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con observancia de los principios de publicidad y contradicción sobre las mismas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 77 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Artículo adicionado por el artículo [74](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar, sobre el texto adicionado por la Ley 1395 de 2010, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Ley 1395 de 2010:

ARTÍCULO 9-A. Son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio y la confesión, ~~y el indicio.~~ <texto tachado en la publicación oficial>

El fiscal podrá practicar otros medios de prueba no contenidos en esta ley, de acuerdo con las disposiciones que lo regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

[ARTÍCULO 10. DE LA COMPARECENCIA AL PROCESO.](#) <Artículo derogado por el artículo 78 de la Ley 1453 de 2011>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 78 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 10. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparecieren por sí o por interpuesta persona, la autoridad competente ordenará su emplazamiento, en los términos del artículo [13](#) de la presente ley.

Vencido el término de emplazamiento se designará curador ad litem, siempre que no se hubiere logrado la comparecencia del titular del bien objeto de extinción, con quien se adelantarán los trámites inherentes al debido proceso y al derecho de defensa. Igualmente, en todo proceso de extinción de dominio, se emplazará a los terceros indeterminados, a quienes se designará curador ad litem en los términos de esta ley.

[ARTÍCULO 10-A. DEL TRÁMITE ABREVIADO.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo adicionado por el artículo [75](#) de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: > En caso de incautación de dineros o valores tales como metales preciosos, joyas u otros similares que no tengan propietario, poseedor o tenedor identificable, una vez surtido el emplazamiento, y siempre que no comparezca alguien que demuestre interés legítimo, el operador judicial de conocimiento dictará, dentro de los diez días siguientes, resolución de procedencia de la acción de extinción de dominio, y la remitirá al juez competente para que adelante el trámite correspondiente para la declaración de extinción de dominio a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, a más tardar dentro de los quince días siguientes al recibo de la respectiva resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [75](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar, sobre el texto adicionado por la Ley 1395 de 2010, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

CAPITULO IV.

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 145 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación, directamente a través de los fiscales delegados que conforman la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos o en su defecto los fiscales delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializado. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal podrá conformar unidades especiales de extinción de dominio.

La segunda instancia de las decisiones proferidas en el trámite de extinción de dominio, se surtirá ante la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal - Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.

Corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el lugar de ubicación de los bienes. La segunda instancia se surtirá ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán a los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales, emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Artículo modificado por el artículo [76](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Inciso 2o. del texto modificado por la Ley 1395 de 2010 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En relación con los incisos 1o. y 3o., estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740 de 2003.
- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia C-1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 11 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 1395 de 2010:

ARTÍCULO 11. Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación directamente, o a través de Fiscales Delegados que conforman la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos o en su defecto los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de cada seccional.

La segunda instancia de las decisiones proferidas en el trámite de extinción se surtirá ante la Unidad Fiscalías Delegadas ante Tribunal- Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.

Corresponde a los jueces penales del circuito especializados del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare la extinción de dominio. Si se hubieren encontrado bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez determinado por reparto, de aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del circuito especializado. La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la acción, no alterará la competencia.

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 11. Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación, directamente, o a través de fiscales delegados ante los jueces competentes para dictar la sentencia de extinción de dominio. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal podrá conformar unidades especializadas de extinción de dominio.

Corresponde a los jueces penales del circuito especializados, del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare la extinción de dominio. Si se hubieren encontrado bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez, determinado por reparto, de aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del circuito especializados. La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la investigación, no alterará la competencia.

ARTÍCULO 12. FASE INICIAL. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014 por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 1453 de 2014> El nuevo texto es el siguiente: > La fase inicial será adelantada por el fiscal competente. Esta fase tiene como finalidad identificar los bienes sobre los cuales podría recaer la acción, recaudar los medios de prueba que evidencien cualquiera de las causales previstas en el artículo [20](#) y que quebranten la presunción de buena fe exenta de culpa respecto de bienes en cabeza de terceros. La fase inicial terminará con la resolución de inicio o inhibición, según fuere el caso.

En esta fase o en cualquier momento del proceso el fiscal podrá decretar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de cualquier tipo de bien, lo cual incluye las divisas, metales y piedras preciosas, dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores y rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos aún sin su secuestro o aprehensión, así como también la ocupación y la incautación sobre bienes cautelados.

En todo caso, la Dirección Nacional de Estupeficientes será el secuestrario o depositario de los bienes objeto de medidas cautelares.

Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediata disposición de la Dirección Nacional de Estupeficientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –Frisco–, quien podrá enajenarlos, directamente o a través de terceras personas, de acuerdo con las normas aplicables a la venta de bienes con extinción de dominio. Mientras no se produzca la enajenación, la Dirección Nacional de Estupeficientes deberá proveer la adecuada administración de acuerdo con los sistemas previstos en la Ley [785](#) de 2002 y en sus normas reglamentarias.

De conformidad con lo establecido en el inciso anterior, el Gobierno reglamentará lo relativo a las garantías

para los casos en que no se declare la extinción de dominio.

La Dirección Nacional de Estupefacientes podrá, mediante resolución motivada, ordenar la revocat suspensión o terminación, según fuere el caso, de los actos administrativos de designación en dep provisional o cualquier tipo de contrato sobre los mencionados bienes suscritos con terceros o entre depositarios provisionales y terceros. Sin perjuicio de la obligación de restitución inmediata a favor c Dirección Nacional de Estupefacientes, en aquellos casos en los que los depositarios provision: arrendatarios o cualquier otro tipo de contratistas que estén adelantando actividades económicos en di bienes, deberán en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la revocat suspensión o terminación, presentar ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, la reclama liquidatoria debidamente sustentada de los perjuicios que se le hayan podido causar con la revocat suspensión o terminación a que se hace referencia.

La Dirección Nacional de Estupefacientes resolverá la petición de indemnización mediante administrativo motivado. Cuando en el acto administrativo se reconocieren sumas a favor del peticion estas serán pagadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El acto administrativo que resuelva la solicitud es susceptible de los recursos de la vía gubernativa y d acciones contencioso administrativas de acuerdo con las reglas generales.

La Dirección Nacional de Estupefacientes hará una visita de campo de verificación del uso de los bien levantará un acta en la que consten las inversiones y explotaciones económicas que se ejecutaron adelanten en el respectivo bien.

Las autoridades administrativas y de policía prestarán todo el apoyo que requiera la Dirección Nacional Estupefacientes para efectivos los actos administrativos que se profieran para los fines de esta ley.

PARÁGRAFO 1o. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Los bienes, el producto de su venta y administración, así como los recursos objeto de extinción de dom ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión, Social y Lucha contra el Crimen Organizado y s asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y ll contra la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate, cofinancia del sistema de responsabilidad penal adolescente, infraestructura carcelaria, fortalecimiento d administración de justicia y funcionamiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

PARÁGRAFO 2o. La Dirección Nacional de Estupefacientes, con cargo a los recursos del Fondo pa Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, Frislico, y la Agencia Presidencial la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con cargo a los recursos del Fondo pa Reparación de las Víctimas, podrán efectuar los gastos que sean necesarios para la protecc administración, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.

PARÁGRAFO 3o. El pago de las obligaciones tributarias relacionadas con los bienes que administr Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social-Fondo para la Reparación de las Víctimas, se re por lo dispuesto en el artículo [9o](#) de la Ley 785 de 2002.

PARÁGRAFO 4o. La enajenación de los bienes sujetos a registro, se efectuará mediante acto administr el cual una vez inscrito en la oficina correspondiente, constituirá título traslativo de dominio suficiente.

PARÁGRAFO 5o. En lo relacionado con el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cata continuarán vigentes los artículos [23](#) de la Ley 793 de 2002 y 70 de la Ley 915 de 2004.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Incisos 1o. y 2o. modificados por el artículo [77](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

- El artículo 13 de la Ley 1151 de 2007 continúa vigente según lo dispuesto por el artículo [276](#) de la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014'.

- Parágrafos 1o., 2o., 3o. y 4o. adicionados por el artículo [13](#) de la Ley 1151 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del párrafo original debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1o. del artículo [177](#) de la Ley 1448 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011, 'Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones'.

(Por favor remitirse a la norma que a continuación se transcribe para comprobar la vigencia del texto original:)

'ARTÍCULO [177](#). ...

'PARÁGRAFO 1o. Los bienes inmuebles rurales que han ingresado al Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, serán trasladados a petición de la Unidad Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en los términos y mediante el procedimiento que el Gobierno Nacional establecerá para efecto. A partir de la expedición de la presente ley, los bienes inmuebles entregados en el marco del proceso de la Ley 975 de 2005, serán transferidos directamente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas a su solicitud, y siempre que ello no afecte destinaciones específicas de reparación según lo establecido en la Ley 975 de 2005 y demás normas que regulan la materia.'

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- En demanda contra el artículo 77 de la Ley 1395 de 2010, la Corte Constitucional declaró estarse a resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Y se declaró INHIBIDA de fallar por inepta demanda relación la expresión 'En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestro depositario de los bienes embargados o intervenidos”.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Artículo original declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Legislación Anterior

Texto original, con las modificaciones introducidas por la Ley 1395 2010 y las adiciones de la Ley 11 de 2007:

ARTÍCULO 12. <Inciso modificado por el artículo [77](#) de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es siguiente: > El fiscal competente para conocer la Acción de Extinción de Dominio, iniciará investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo [5](#)o de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción recaudar los medios de prueba que evidencien cualquiera de las causales previstas en el artículo [2](#)c que quebranten la presunción de buena fe respecto de bienes en cabeza de terceros.

<Inciso 2o. modificado por el artículo [77](#) de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: > En desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o solicitar al Juez competente, adopción de las mismas, según corresponda, que comprenderán la suspensión del poder dispositivo, embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible aprehensión física. En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestro o depositario de los bienes embargados o intervenidos.

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos financieros que representen valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

Los bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, podrán ser enajenados al mejor postor en condiciones de mercado, cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto líquido, acuerdo con las normas vigentes. De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

En todos los casos, la fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier faltante que presente para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o

subasten. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o desarrollo a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley comercial o financiera ordinaria.

PARÁGRAFO. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

<Ver Notas del Editor> Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al Fondo para Rehabilitación, Inversión, Social y lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo [13](#) de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es siguiente: > Sin perjuicio de las causales de inexistencia del acto o contrato a que se refiere el artículo 898 del Código de Comercio, la administradora de bienes incautados, o con extinción de dominio comiso, o entregados para la reparación de las víctimas, podrá ordenar su enajenación o disposición cuando su naturaleza, uso o destino amenace deterioro o se imposibilite su administración.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [13](#) de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es siguiente: > La Dirección Nacional de Estupefacientes, con cargo a los recursos del Fondo para Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, Frisco, y la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con cargo a los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, podrán efectuar los gastos que sean necesarios para la protección, administración, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo [13](#) de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es siguiente: > El pago de las obligaciones tributarias relacionadas con los bienes que administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social-Fondo para la Reparación de las Víctimas, que sean improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

- a) La enajenación del bien o la generación de ingresos suficientes por razón de su uso;
- b) La devolución al propietario en virtud de decisión judicial definitiva, en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

En los eventos previstos en los dos anteriores literales, una vez cese la suspensión, el contribuyente deberá sufragar el importe de los tributos no pagados durante la suspensión. En todo caso, tal pago será condición necesaria para la devolución del bien al propietario en el caso previsto en el literal b).

La suspensión del pago de tributos, de que aquí se trata, no impedirá la enajenación de los bienes.

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo [13](#) de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es siguiente: > La enajenación de los bienes sujetos a registro, se efectuará mediante acto administrativo que una vez inscrito en la oficina correspondiente constituirá título traslativo de dominio suficiente.

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 12. El fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, iniciará investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo [5o.](#) de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, acuerdo con las causales establecidas en el artículo [2o.](#)

En el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o solicitar al Juez competente la adopción de las mismas, según corresponda, que comprenderán la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de título

valores, y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fue imposible su aprehensión física. En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestro depositario de los bienes embargados o intervenidos.

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos financieros que representen valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

Los bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, podrán ser enajenados al mejor postor, en condiciones de mercado, cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto líquido, de acuerdo con las normas vigentes. De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

En todos los casos, la fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier faltante que presente para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o subastan. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o desarrollo a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley comercial o financiera ordinaria.

PARÁGRAFO. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado mantendrá una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

<Ver Notas del Editor> Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.

ARTÍCULO 12-A. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 81 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la fase inicial y de investigación con el propósito de recaudar pruebas fundamentadas en el trámite de extinción, el fiscal podrá utilizar las siguientes técnicas de investigación:

- a) Registros y allanamientos;
- b) Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares;
- c) Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes; y vigilancia de cosas.

Cuando se decrete la práctica de las anteriores técnicas de investigación, se deberá proferir resolución de sustanciación que contenga las razones o motivos fundados para su práctica.

El control de garantía y legalidad se hará ante los jueces de extinción de dominio.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 81 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Artículo adicionado por el artículo [78](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo adicionado por la Ley 1395 de 2010 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por Corte Constitucional mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jor Ignacio Pretelt Chaljub.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Ley 1395 de 2010:

ARTÍCULO 12-A. Durante la fase inicial y con el exclusivo propósito de identificar bienes y recaudar elementos materiales probatorios que fundamenten la causal a invocar, el fiscal podrá utilizar las siguientes técnicas de investigación:

Registros y Allanamientos.

Interpretaciones de comunicaciones telefónicas y similares.

Recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes; y Vigilancia de cosas.

Cuando se decreta la práctica de las anteriores técnicas de investigación se deberá proferir decisión de sustanciación que contenga las razones o motivos fundados para su práctica.

Se cumplirá con las exigencias previstas para ellas en la Ley [906](#) de 2004.

ARTÍCULO 12-B. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo adicionado por el artículo [79](#) de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: > Si durante la fase inicial no se logran identificar bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción o no se acredita la existencia de alguna de las causales previstas en el artículo [20](#) de esta ley, el Fiscal competente se abstendrá de iniciar trámite de extinción de dominio mediante resolución interlocutoria contra la cual proceden los recursos de ley.

Esta decisión podrá ser revocada de oficio o a petición de parte aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [79](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar, sobre el texto adicionado por la Ley 1395 2010, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrada Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

ARTÍCULO 13. DEL PROCEDIMIENTO. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 145 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. El fiscal a quien le corresponda el trámite del proceso, ordenará notificar la resolución de inicio de la acción de extinción de dominio a los titulares de derechos reales principales y accesorios de los bienes objeto de la misma. La notificación se surtirá de manera personal y en subsidio por aviso, de conformidad con los artículos [315](#) y [320](#) del Código de Procedimiento Civil. En los eventos previstos en el artículo [318](#) del Código de Procedimiento Civil, se procederá al emplazamiento allí consagrado. El fiscal directamente o a través de cualquier funcionario público podrá asumir las funciones que le son asignadas a las empresas de servicio postal autorizado, para efectos de llevar a cabo cualquier procedimiento de notificación, en aquellos lugares en donde estas empresas no presten sus servicios o cuando las condiciones de cualquier proceso lo ameriten.

La notificación de quien debe ser notificado personalmente podrá realizarse en cualquiera de los siguientes sitios:

- a) En el lugar de habitación;
- b) En el lugar de trabajo;
- c) En el lugar de ubicación de los bienes.

En el evento de que en la fase inicial el fiscal hubiese efectuado una notificación personal en virtud de la materialización de una medida cautelar, o cuando el afectado hubiese actuado en la fase inicial entenderá que se encuentra vinculado a la actuación y por ende la resolución de inicio se le notificará en el estado.

Si aún no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará y practicará las medidas cautelares en cualquier tiempo, incluso antes de notificada la resolución de inicio a los afectados. Contra esta resolución proceden los recursos de ley y en caso de revocarse la resolución de inicio, se someterá al grado jurisdiccional de la consulta. Ningún recurso suspenderá la ejecución o cumplimiento de la medida cautelar.

Los titulares de derechos reales principales y accesorios tendrán un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente al de su notificación, para presentar su oposición y aportar o pedir las pruebas.

1. La resolución de inicio se informará al agente del Ministerio Público por cualquier medio expedito de comunicación.

2. En la resolución de inicio se ordenará emplazar a los terceros indeterminados de conformidad con lo establecido en el artículo [318](#) del Código de Procedimiento Civil. A los terceros indeterminados que concurren, se les designará curador ad litem en los términos establecidos en el artículo [90](#) y [318](#) del Código de Procedimiento Civil.

de Procedimiento Civil. Los terceros indeterminados que se presenten a notificarse personalmente de del término del emplazamiento, tendrán diez (10) días para presentar sus oposiciones. El curador de terceros indeterminados que no concurren, contará con el término de diez (10) días contados a partir de siguiente al de su notificación, personal para presentar oposiciones y aportar o pedir pruebas.

3. Transcurrido el término anterior, el fiscal abrirá el proceso a pruebas por el término de treinta (30) días, donde ordenará la incorporación de las pruebas aportadas que obren en el expediente y decretará las que hayan sido oportunamente solicitadas y las que de oficio considere. La resolución que niegue prueba susceptible de recurso de reposición.

4. Concluido el término probatorio, se correrá traslado para alegar de conclusión por el término común cinco (5) días.

5. Transcurrido el término anterior, durante los treinta (30) días siguientes el fiscal dictará resolución declarando la procedencia o improcedencia de la acción de extinción de dominio, la cual se regirá por las siguientes reglas:

a) La procedencia se declarará mediante resolución apelable;

b) La improcedencia respecto de terceros de buena fe exentos de culpa, se declarará mediante resolución apelable. En caso de que no sea apelada, deberá surtir el grado jurisdiccional de consulta;

c) Los demás casos de improcedencia, se declararán mediante resolución apelable. En el evento de que la improcedencia no sea apelada o en caso que la apelación hubiera confirmado la improcedencia, la actuación deberá remitirse al juez competente para que este adopte la decisión definitiva en la sentencia, por el agotamiento de todas las etapas que deben surtir. En todo caso la improcedencia no surtirá efecto alguno hasta tanto sea ratificado en la sentencia.

6. Ejecutoriada la resolución de que trata el numeral anterior, el fiscal remitirá el expediente completo al juez competente. El juez correrá traslado a los intervinientes por el término de cinco (5) días, para que soliciten o aporten pruebas. Decretadas las pruebas, el juez tendrá veinte (20) días para practicarlas. Cumplido lo anterior, correrá traslado por el término común de cinco (5) días para alegar de conclusión.

Vencido el término del traslado dentro de los treinta (30) días siguientes, el juez dictará sentencia declarando o negando la extinción de dominio. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga omnes.

En contra de la sentencia sólo procederá en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por los intervinientes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a grado jurisdiccional de consulta. Los términos establecidos en el presente artículo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento. El incumplimiento o desconocimiento se constituirá en falta disciplinaria gravísima.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Artículo modificado por el artículo [80](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar, sobre el texto modificado por la Ley 1395 de 2010, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Inciso 1o. original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Numeral 1 original declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Numerales 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 11 originales declarados EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Numeral 6, inciso 1o. original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que la negativa de decretar pruebas es impugnabile cuando se trate de pruebas solicitadas por el afectado'.

- Numeral 8 original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que la resolución de improcedencia de la extinción del dominio puede ser impugnada por el afectado'. <El texto del numeral 8 modificado por la Ley 1395 de 2010 era idéntico al original>

- Numeral 9 original declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que el término de cinco (5) días es para aportar pruebas y que los quince (15) días allí previstos comienzan a correr cuando venza el término que razonablemente fije el juez para práctica de pruebas'.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 1395 de 2010:

ARTÍCULO 13. El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. El Fiscal que inicie el trámite dictará resolución interlocutoria en la que propondrá los hechos en que se funda, la identificación de los bienes que se persiguen, la causal que se predica sobre los bienes afectados y las pruebas directas o indiciarias conducentes que evidencien la causal invocada. Tratándose de bienes en cabeza de terceros se deberá relacionar y analizar los medios de prueba que quebranten presunción de buena fe que se predica sobre los mismos.

Si aun no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de notificada la resolución de inicio a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Contra esta decisión proceden los recursos de ley.

2. La resolución de inicio se comunicará al Agente del Ministerio Público y se notificará dentro de los cinco (5) días siguientes a las personas afectadas enviándoles comunicación a la dirección conocida en el proceso y fijando en el inmueble objeto de la acción, noticia suficiente del inicio del trámite y el derecho que le asiste a presentarse al proceso.

Cuando el afectado se encuentre fuera del país la notificación personal se surtirá con su apoderado quien se le haya reconocido personería jurídica en los términos de la ley.

3. Transcurrido cinco (5) días después de libradas las comunicaciones pertinentes y de haberse fijado noticia suficiente, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios según el certificado de registro correspondiente o en su defecto a sus herederos o beneficiarios en caso de bienes en sucesión por causa de muerte, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.

4. El emplazamiento se surtirá por edicto, que permanecerá fijado en la Secretaría por el término de cinco (5) días y se publicará por una vez dentro de dicho término, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora con cobertura en la localidad. Si el emplazado o los emplazados no presentaren dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del curador ad litem, quien velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso a favor de los afectados que no hayan comparecido al trámite.

5. Posesionado el curador ad litem o notificados personalmente todos los afectados, por Secretaría correrá un traslado común de cinco (5) días a los intervinientes, quienes podrán solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición.

6. Transcurrido el término anterior, se decretarán, las pruebas solicitadas que se consideren conducentes y las que oficiosamente considere oportunas el investigador, las que se practicarán en el término de treinta (30) días que no será prorrogable. La negativa de decretar pruebas solicitadas por el afectado será susceptible de los recursos de ley.

La decisión que decreta pruebas de oficio no será susceptible de recurso alguno.

7. Concluido el término probatorio, el fiscal ordenará que por Secretaría se corra el traslado por el término común de cinco (5) días, durante los cuales los intervinientes alegarán de conclusión. Esta decisión solo será susceptible del recurso de reposición.

8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) días siguientes el fiscal dictará una resolución en la cual decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

9. Ejecutoriada la resolución de que trata el numeral anterior se remitirá el expediente completo al juez competente, quien dará el traslado de la resolución a los intervinientes por el término de cinco (5) días para que puedan controvertirla aportando o solicitando pruebas.

Dentro de los quince (15) días siguientes de practicadas las pruebas solicitadas el juez dictará respectiva sentencia que declarará la extinción de dominio o se abstendrá de hacerlo. La sentencia que

se profiera tendrá efectos erga omnes.

10. En contra de la sentencia que decreta la extinción de dominio solo procederá el recurso de apelación, interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su Despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso al grado jurisdiccional de consulta.

11. Cuando se decreta la improcedencia sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal debe someter la decisión al grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el Juez quien decide sobre la extinción o no del dominio, incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre bienes distintos a los mencionados en este numeral. En todo caso, se desestimarán de plano cualquier incidente que los interesados propongan con esa finalidad.

Los términos establecidos en el presente artículo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento, y su desconocimiento se constituirá en falta disciplinaria gravísima.

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 13. El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que propondrá los hechos en que se funda la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes. ~~Contra esta resolución no procederá recurso alguno.~~ Si no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar al juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de notificada la resolución de inicio a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

2. La resolución de inicio se comunicará al agente del Ministerio Público y se notificará, dentro de los cinco (5) días siguientes, a las personas afectadas cuya dirección se conozca. Si la notificación personal no pudiere hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará en la dirección de la persona para que notifique noticia suficiente de la acción que se ha iniciado y del derecho que le asiste a presentarse al proceso.

3. Cinco (5) días después de libradas las comunicaciones pertinentes, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios según el certificado de registro correspondiente, y de las demás personas que se sientan con interés legítimo en el proceso para que comparezcan a hacer valer sus derechos.

4. El emplazamiento se surtirá por edicto, que permanecerá fijado en la Secretaría por el término de cinco (5) días y se publicará por una vez, dentro de dicho término, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora con cobertura en la localidad donde se encuentren los bienes. Si el emplazado o los emplazados no se presentaren dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del curador ad litem, quien velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso a favor del afectado, y empezará a contar el término de que trata el artículo 10 de la presente ley.

5. Dentro de los cinco (5) días siguientes al término de su comparecencia, los intervinientes podrán solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición, y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables.

6. Transcurrido el término anterior, se decretarán, las pruebas solicitadas que se consideren conducentes y las que oficiosamente considere oportunas el investigador, las que se practicarán en el término de treinta (30) días, que no será prorrogable.

El fiscal del conocimiento podrá decretar pruebas de oficio, decisión que no será susceptible de recurr alguno.

7. Concluido el término probatorio, se surtirá traslado por Secretaría por el término común de cinco (5) días, durante los cuales los intervinientes alegarán de conclusión.

8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) días siguientes el fiscal dictará una resolución en la cual decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

9. El fiscal remitirá al día siguiente de la expedición de la resolución de que trata el numeral anterior, expediente completo al juez competente, quien dará traslado de la resolución a los intervinientes por término de cinco (5) días, para que puedan controvertirla. Vencido el término anterior, dictará respectiva sentencia que declarará la extinción de dominio, o se abstendrá de hacerlo, de acuerdo con alegado y probado, dentro de los quince (15) días siguientes. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga omnes.

10. En contra de la sentencia que decreta la extinción de dominio sólo procederá el recurso de apelación, interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso al grado jurisdiccional de consulta.

11. Cuando se decreta la improcedencia sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal debe someter la decisión al grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el Juez quien decide sobre la extinción o no del dominio, incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre bienes distintos a los mencionados en este numeral. En todo caso, se desestimará de plano cualquier incidente que los interesados propongan con esa finalidad.

Los términos establecidos en el presente artículo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento, y su desconocimiento se constituirá en falta disciplinaria gravísima.

ARTÍCULO 14. DE LAS NOTIFICACIONES. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La única notificación personal que se surtirá en todo el proceso de extinción de dominio, será la que se realice al inicio del trámite, en los términos del artículo [13](#) de la presente ley. Todas las demás se surtirán por estado, salvo las sentencias de primera o de segunda instancia, que se notificarán por edicto. ~~Ninguna decisión adoptada por el fiscal es susceptible de recursos.~~

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jair Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 14-A. DE LOS RECURSOS. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 83 de la Ley 145 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra las siguientes providencias:

a) La resolución de inicio, en el efecto devolutivo;

b) La resolución de inhibición, en el efecto suspensivo;

- c) La resolución de procedencia, en el efecto devolutivo;
- d) La resolución de improcedencia respecto de terceros de buena fe exentos de culpa, en el efecto suspensivo;
- e) En los demás casos de resolución de improcedencia, en el efecto devolutivo;
- f) La sentencia de primera instancia, en el efecto suspensivo.

La providencia que deniegue el recurso de apelación sólo será susceptible de recurso de reposición, cuando se trate de la apelación de la sentencia de primera instancia, evento en el cual procederá el recurso de reposición y en subsidio la solicitud de copias para la interposición del recurso de queja.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 83 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

- Artículo adicionado por el artículo [81](#) de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.7 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar, sobre el texto modificado por la Ley 1395 de 2010, por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-540-11 de 6 de julio de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Ley 1395 de 2010:

ARTÍCULO 14-A. Contra las providencias interlocutorias proferidas por el fiscal que conoce del trámite proceden los recursos de reposición, apelación y queja, que se interpondrán por escrito y se tramitarán conforme al procedimiento establecido en la Ley [600](#) de 2000, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en la presente ley.

Las decisiones que declaren desierto el recurso de apelación y la que ordena el traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, serán las únicas resoluciones de sustanciación impugnables contra las cuales solo procederá el recurso de reposición.

PARÁGRAFO. En los eventos en que el material probatorio allegado por el recurrente demuestre de manera anticipada que sobre el bien de su propiedad no concurre la causal invocada en la resolución de inicio, el fiscal que conozca de los recursos podrá excluir el bien como objeto de la acción, siempre que tal decisión no se funde en un medio de prueba que requiera ser controvertido en el debate probatorio.

[ARTÍCULO 15. DE LAS NULIDADES.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2010.>

2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Cualquiera nulidad que aleguen las partes, considerada en la resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-149-05 de 22 febrero de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo , mediante Sentencia C-74 03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 16. CAUSALES DE NULIDAD. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo 84 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Serán causales de nulidad únicamente las establecidas en el artículo [140](#) del Código de Procedimiento Civil y su trámite será el señalado en el artículo anterior.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 84 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo original declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE por Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que también configura causal de nulidad cualquier violación de las reglas del debido proceso consagradas en el artículo [29](#) de la Constitución'.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 16. Serán causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, las siguientes:

1. Falta de competencia.
2. Falta de notificación.
3. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Negativa injustificada, a decretar una prueba conducente o practicar, ~~sin causa que lo justifique~~, una prueba oportunamente decretada.

[ARTÍCULO 17. DE LAS EXCEPCIONES E INCIDENTES.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar a la presentación y al trámite de excepciones previas ni de incidentes salvo el de objeción peritazgo por error grave. Todos serán decididos en la resolución de procedencia o en la sentencia definitiva.

Las partes deberán proponer la objeción al dictamen pericial, sólo por error grave y dentro de los tres días siguientes al traslado del mismo, presentando las pruebas en que se funda. El Fiscal, si considera improcedente la objeción, decidirá de plano; en caso contrario, dispondrá un término de cinco (5) días para practicar pruebas y decidir.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

[ARTÍCULO 18. DE LA SENTENCIA.](#) La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad uso del bien y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a disposición del Fondo, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega inmediata de los mismos o que se consignen a su disposición los valores dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la anulación del mismo y expedición de uno nuevo a nombre del citado Fondo.

Si en la sentencia se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena fe ex parte de culpa, la Dirección Nacional de Estupeficientes, directamente o por conducto de la Fiduciaria, proce-derá a su venta o subasta, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia se indique.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo, mediante Sentencia C-740-03 de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

[ARTÍCULO 19. DE LOS GASTOS PROCESALES Y DE ADMINISTRACIÓN.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Los gastos que generen con ocasión del trámite de la acción de extinción del dominio, así como los que se presenten por la administración de los bienes en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado al fondo, salvo que la sentencia declare la improcedencia de los bienes.

PARÁGRAFO. Corresponde al Consejo Nacional de Estupeficientes la destinación de los rendimientos financieros, de acuerdo con los soportes que para el efecto presenten las entidades miembros de cada órgano.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 19-C. REQUERIMIENTOS. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo adicionado por el artículo 85 de la Ley 145 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: > Las entidades públicas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Catastro departamental, Instrumentos Públicos, Notariado y Registro, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otras; así como entidades privadas que sean objeto de requerimientos por parte de la policía judicial, en razón de su objeto social, deberán atender dichos requerimientos de manera inmediata, oportuna y gratuita, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles una vez radicado el requerimiento.

Los gastos de envío serán asumidos por la entidad que expide los documentos, el servidor público responsable en una entidad pública que incumpla con el tiempo establecido incurrirá en falta disciplinaria. Las sociedades que incumplan este requerimiento en el plazo serán sancionadas con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 22 de 1995.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 85 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.1 de 24 de junio de 2011.

Tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 86:

'ARTÍCULO 86. VIGENCIA DE LAS NORMAS SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Las normas sobre extinción de dominio a que se refiere esta ley, entrarán en vigencia a partir de su promulgación y se aplicarán a los procesos iniciados con anterioridad a la presente a la ley. El tránsito de legislación se sujetará a lo previsto en el artículo [699](#) del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de notificaciones personales, emplazamientos, el fiscal del caso tendrá la facultad de disponer que se surtan íntegramente con base en lo establecido en esta ley, evento en el cual ordenará dejar sin valor y efecto las actuaciones tendientes a notificar y emplazar que se pudieron haber surtido con base en la legislación anterior. '

CAPITULO V.

DE LOS PROCESOS EN CURSO.

ARTÍCULO 20. DE LOS PROCESOS EN CURSO. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Los términos y recursos que hubieren empezado a correr se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, en todo lo demás se aplicará esta ley.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia C-1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

CAPITULO VI.

DISPOSICIONES FINALES.

[ARTÍCULO 21. DE LA COOPERACIÓN.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Los convenios y tratados de cooperación suscritos, aprobados y debidamente ratificados por Colombia, serán plenamente aplicables para la obtención de colaboración en materia de afectación de bienes, cuando su contenido sea compatible con la acción de extinción de dominio.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

[ARTÍCULO 22. DE LA DEROGATORIA.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Deróganse todas las normas y disposiciones que le contrarían a esta Ley, en especial la Ley [333](#) de 1996.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

[ARTÍCULO 23. BIENES Y DERECHOS UBICADOS EN SAN ANDRÉS.](#) <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> <Artículo modificado por el artículo [267](#) de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: > Bienes y derechos ubicados en el departamento Archipiélago: Los bienes, los rendimientos y los frutos que generen los mismos, localizados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya extinción de dominio haya decretado conforme a la presente ley deberán destinarse prioritariamente, a programas sociales que beneficien a la población raizal.

Notas de Vigencia

- Según lo dispuesto en el párrafo 5o. del artículo 80 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, este artículo continúa vigente.

- Artículo modificado por el artículo [267](#) de la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014'.

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos [339](#), [340](#), [341](#) y [342](#), y por la Ley 152 de 1994 en los artículos [13](#), [14](#) y [25](#).

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1118-04 de 9 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 793 de 2002:

ARTÍCULO 23. Los bienes y los rendimientos y los frutos que generen los mismos localizados en jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la presente ley, deberán destinarse, a la financiación programas sociales en el Archipiélago.

Los recaudos generados en virtud de la destinación provisional de bienes se destinarán en igual forma

ARTÍCULO 24. VIGENCIA. <Ley, salvo el artículo [18](#), derogada a partir del 20 de julio de 2014, por el artículo [218](#) de la Ley 1708 de 2014> Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. No obstante la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de bienes. En todo caso se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa grave deterioro a la moral social y es conducta con efectos permanentes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-740-03, mediante Sentencia 1065-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-03 de 26 agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

El Presidente del honorable Senado de la República,

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

WILLIAM VÉLEZ MESA.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

ANGELINO LIZCANO RIVERA.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

FERNANDO LONDOÑO HOYOS.

Presidencia de la República

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
n.d.
Última actualización: 20 de abril de 2024 - (Diario Oficial No. 52.716 - 3 de abril de 2024)

